

JUZGADO DEL TRABAJO VII

JUICIO: "GOANE ROSANA PAOLA c/ OBRA SOCIAL DEL PERSONAL DE EDIFICIO DE RENTA Y HORIZONTAL DE LA REP.ARG.Y OTRO s/ COBRO DE PESOS". EXPTE. N° 528/20.

German Rios, apoderado del SUTERH Tucumán, a V.S.
respetuosamente expongo:

Que, en tiempo y forma vengo a expresar agravios en contra de la Sentencia de fecha 06.07.22 la cual Resuelve...

..... *"I. ADMITIR la demanda promovida por la Sra. Rosana Paola Goane, DNI N°23.519.258, con domicilio en calle Lamadrid N°1249, 5to piso, depto. B, de esta ciudad, en contra de la Obra Social del Personal de Edificios de Renta y Horizontal de la República Argentina, CUIT N°30-59965970-2, y en contra del Sindicato Unico de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal, CUIT 30-67295931- 0; ambas con domicilio en calle Salta N°450, de esta ciudad.*

En consecuencia, condeno a los demandados solidariamente:

a) al pago de la suma total de \$1.546.378,88 en concepto de: indemnización Art. 245 de la LCT, preaviso, sac s/ preaviso, integración mes de despido, haberes del mes, SAC proporcional, vacaciones proporcionales, multa del Art. 2 de la Ley N° 25.323, multa del Art. 80 de la LCT, multa Arts. 8 y 15 ley 24.013.

b) lo dispuesto enl apartado a) de este punto, deberá hacerse efectivo dentro de los DIEZ (10) DÍAS de quedar firme la presente resolución.

II. ABSOLVER a las demandadas de la sanción del Art. 275 LCT, conforme lo considerado. III. IMPONER LAS COSTAS a las demandadas vencidas, por lo tratado.

IV. REGULAR HONORARIOS: a) Al letrado Carlos Augusto Ibañez, la suma de \$420.365,16; b) al letrado German Rios, la suma de \$210.926,07; conforme lo considerado.

V. Firme la presente REMITIR copia de la presente resolución a la AFIP (cfr. Arts. 44 y 46 de la Ley 25.345 y Resolución General de AFIP N° 3739/15).

VI. Firme la presente, PRACTICAR PLANILLA FISCAL a los fines de su reposición (Art. 13 Ley 6204).

VII. COMUNICAR a la Caja de Previsión y Seguridad Social de Abogados y Procuradores de Tucumán. “...

Agravio:

Me agravia la Sentencia ya que admite la demanda promovida por la Actora en contra del Sindicato Unico de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal, condenando a los demandados solidariamente.

Por lo tanto, la cuestión controvertida y de justificación necesaria sobre la cual el A Quo debio pronunciarse en primer término es la existencia de una relación laboral entre las partes y la existencia de “Responsabilidad Solidaria” entre la obra social y el sindicato.

El A Quo en los “Considerandos” de la sentencia, propone...

... “Por lo tanto, las cuestiones controvertidas y de justificación necesaria sobre las cuales deberé pronunciarme, son las siguientes:

I. Existencia de la relación laboral entre la actora y las accionadas. En su caso, carácter de co empleadores de las demandadas; y características de la relación laboral: fecha de ingreso, tareas, categoría y jornada.”...

Existencia de relación laboral

Afirma la actora haber ingresado a trabajar para la demandados OSPERYHRA y SUTERH.

Mi mandante SUTERH, negó en forma categórica la existencia de la relación laboral, como así también las características que afirma la actora que rodearon a la misma (jornada de trabajo; fecha de ingreso; remuneración, etc.).

La dilucidación de la cuestión planteada amerita tener presentes aspectos relativos al marco normativo aplicable. Así, de acuerdo a la Ley N° 20744 (LCT) habrá contrato de trabajo -cualquiera sea su forma o denominación- siempre que una persona física se obligue a realizar actos, ejecutar obras o prestar servicios en favor de la otra y bajo su dependencia, durante un período determinado o indeterminado de tiempo, mediante el pago de una remuneración. Sus cláusulas -en cuanto a la forma y condiciones de la prestación- quedan sometidas a las disposiciones de orden público, los estatutos, las convenciones colectivas, los laudos con fuerza de tales y los usos y costumbres (art. 21).

En igual sentido, el art. 50 de igual cuerpo legal, prescribe que la existencia de un contrato de trabajo se acredita por todos los medios de prueba que admite la legislación adjetiva y por lo dispuesto en su art. 23, que consagra una presunción -que no admite prueba en contrario- de la existencia del contrato de trabajo, ante la acreditación de la prestación de servicios, aun cuando se utilicen figuras no laborales.

La Excma. Corte Suprema de Justicia de la Provincia se enrola en la llamada 'tesis restrictiva', que considera que la prestación de servicios -que genera la presunción- es aquella brindada bajo dependencia de otro. **Por ello, sostuvo que - en cada caso- se debe examinar si la prestación de servicio corresponde, o no, al ámbito laboral señalándose, además, que el sólo hecho de que se acredite la misma, no significa -sin más- que deba presumírsela de carácter laboral** (cfr. CSJ Tuc., sentencias nro. 227 del 29/03/05; N° 29 del 10/02/04 y N° 4655 del 06/06/02, entre otras).

Teniendo en cuenta que corresponde a los tribunales inferiores adaptar sus decisiones a los precedentes dictados por nuestro Máximo

Tribunal Provincial, en resguardo de los principios de igualdad ante la ley, seguridad jurídica y celeridad procesal y considerando la cuestión planteada en la presente litis, estimo que el A Quo debió aplicar el criterio recientemente aludido. Con lo cual, en el caso de autos no sólo debe acreditarse la prestación de servicios, sino también su carácter dependiente o dirigido; y que dicha prestación de servicios sea de carácter laboral.

Ahora bien, debo subrayar que -quien afirma la existencia de un hecho debe probarlo (art. 302 del CPCC supletorio y 14 del CPL) y que también está a su cargo corroborar su carácter laboral -cuando no surge incuestionable por sí mismo o, como sucede en este proceso, y cuando es un hecho que fue negado en forma categorica por mi mandante.

En este orden de ideas, no debe perderse de vista que la carga de la prueba actúa como un imperativo establecido en el propio interés de los litigantes, quienes deben ocasionar el convencimiento o certeza sobre los hechos debatidos, dado que el juez realiza su reconstrucción en función de los elementos probatorios aportados a la causa por las partes. Dentro de este marco, el art. 302 del CPCC distribuye de manera anticipada -entre los litigantes- la responsabilidad de probar y brinda una pauta, al sentenciante, acerca de cómo fallar cuando no encuentra en el proceso material probatorio suficiente que le genere certeza sobre los hechos que deben fundamentar su decisión e, indirectamente, establece a cuál de las partes le interesa acreditar tales hechos para evitarse consecuencias desfavorables.

Como primera afirmación para sostener este agravio; es que la Actora no demostró la efectiva prestación de servicios con subordinación económica, técnica y jurídica en relación al Sindicato Unico de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal Filial Tucumán; por lo tanto no corresponde que se tenga por operativa la presunción del art. 23 de la LCT.

Asimismo, estimo menester señalar que -tal como también lo sostiene el Alto Tribunal Local- los precedentes jurisprudenciales no deben ser aplicados de modo abstracto y carentes de análisis, sino que el juzgador debe tener en consideración para dirimir un conflicto, la situación particular de cada caso, considerando para ello las circunstancias de tiempo, modo, personas y, podría agregarse, usos y costumbres, como así también el conocimiento personal del contexto socio-económico y cultural que posee el magistrado (art. 33 CPCC, de aplicación supletoria al fuero, conforme art. 14 CPL).

En ese contexto, corresponde que el A quo - para determinar la naturaleza jurídica del trabajo prestado- no basta establecer principios en abstracto, sino que -en cada caso- deben tenerse en cuenta las concretas modalidades bajo las cuales se desenvolvía la relación. Las circunstancias fácticas y las evidencias arrimadas otorgan a cada conflicto un marco que varía caso por caso, y las cuestiones de hecho y prueba adquieren en estos supuestos una relevancia particular.

Corresponde analizar las constancias de la causa -especialmente las pruebas rendidas- a fin dilucidar el punto en crisis.

En la sentencia el A Quo expresa....

.... “Por otro lado, las pruebas aportadas, consistentes en las declaraciones testimoniales, el apercibimiento dispuesto por el Art. 58 del CPL, y el del Art. 325 del CPCC supletorio, también me permiten concluir que ambas demandadas revestían el carácter de empleadoras de la actora, en los términos del Art. 26 de la LCT.

En efecto, la citada norma prescribe que, se considera empleador a la persona física o conjunto de ellas, o jurídica, tenga o no personalidad jurídica propia, que requiera los servicios de un trabajador. La determinación de quien es el empleador, tiene una directa relación con el principio de primacía de la realidad, que determina para quien o quienes el trabajador ha prestado servicios y a cuya autoridad se ha sometido.

En ese marco, el empleador múltiple o plural aparece como una estructura compleja, de carácter transitorio o permanente, formada por un conjunto de personas sometidas a una dirección unitaria, a través de vínculos contractuales o no, y con arreglo a criterios de coordinación, subordinación o fórmulas intermedias y más descentralizadas de centros de decisión.

En el caso, conforme se encuentra acreditado, se da la condición de que el vínculo entre las personas jurídicas (que conforman la parte empleadora) y la actora, es simultáneo y coexistente, el vínculo laboral es unitario, es decir, que hay una sola relación o contrato de trabajo, aunque el sujeto empleador esté integrado por una pluralidad subjetiva.

Dicho esto, corresponde, a los efectos legales, unificar como parte demandada, a OSPERYRHA y SUTERH, las que serán responsables solidariamente por las obligaciones emergentes del contrato y su extinción. Así lo considero.

Por último, respecto a las características de la relación laboral, conforme las testimoniales brindadas, y dada la operatividad de los apercibimientos dispuestos (Arts. 58, 61 y 91 del CPL, 55 de la LCT y 325 del CPCC), acreditadas las tareas que la actora manifiesta haber realizado en la demanda, tengo por demostrado que efectivamente debía estar categorizada como administrativa de tercera categoría del CCT 736/16. Sobre los horarios, tengo probado que cumplía media jornada de trabajo; que ingresó a trabajar para las demandadas en la fecha por ella indicada en la demanda, el 01/06/16, y que percibió en febrero del 2020 una remuneración de \$19.290. Así lo declaro

4. Por lo expuesto en los párrafos precedentes, declarada la existencia de un verdadero contrato de trabajo entre las partes, con las condiciones laborales especificadas, cabe subsumir la relación jurídica de los litigantes en las disposiciones de la Ley de Contrato de Trabajo y el CCT N° 736/16. Así lo declaro.”....

La A Quo efectúa un razonamiento erróneo para llegar a la conclusión de que las demandadas Obra Social y Sindicato son responsable solidariamente; ya que basa su razonamiento en el análisis de las definiciones de figuras jurídicas del ámbito laboral (empleador, empleador multiple o plural, contrato de trabajo).

Asimismo, aborda cuestiones en relacion a la existencia de un vínculo entre las personas jurídicas (que conforman la parte empleadora) y la actora, declarando en forma infundada que “es simultáneo y coexistente,

el vínculo laboral es unitario, es decir, que hay una sola relación o contrato de trabajo, aunque el sujeto empleador esté integrado por una pluralidad subjetiva.”...., siendo esta cuestión novedosa en la causa; ya que no fue objeto de prueba por la actora.

Con el análisis de estos elementos el A Quo procuro crear la idea falsa de una prestación de servicios de carácter laboral en relación a mi mandante el Sindicato Unico de Trabajadores de Edificios (SUTERH); cuando la verdad de los hechos es que la actora es una simple afiliada que concurría a la sede de Suterh como cualquier otro afiliado; y colaboraba en los eventos del día de la mujer, del día del niño, etc.; y colaboraba con la comisión de mujeres de la comisión directiva; lo cual lo puede hacer cualquier afiliada.

La A Quo debió examinar si la prestación de servicio de la Actora corresponde, o no, al ámbito laboral; debiendo tener especial cuidado y atención, en que el sólo hecho de que se acredite la misma, no significa -sin más- que deba presumírsela de carácter laboral

Ingresando en el análisis de la acreditación de la prestación de servicios por parte de la actora es importante destacar que el valor de la prueba testimonial - prueba por excelencia para acreditar relaciones laborales no registradas o negadas - reside precisamente en las circunstancias de modo, tiempo y lugar que los testigos refieren, en apoyo de sus versiones respecto de los hechos que afirman conocer o saber. Las razones proporcionadas -en sustento de lo dicho- no son sino exigencias lógicas y mínimas del examen que de la prueba testimonial debe realizar el juzgador en el marco de la sana crítica racional. Por el contrario, toda afirmación despojada de una explicación circunstanciada -que permita establecer por qué el testigo sabe o conoce respecto de determinado hecho- resulta irrelevante como elemento de comprobación, en razón de que su declaración debe

persuadir al juez y ello obviamente no ocurrirá si no aparece respaldado en razones o motivos que la tornen no solo creíble, sino también racionalmente explicable que las cosas sucedieron tal como son referidas por el deponente.

Causa agravio cuando la A Quo concluye....

.... *“2.1.5. Así las cosas, considero veraces y eficaces, con los alcances antes apuntados, los testimonios de las Sras. Castro y Sanchis, y de los Sres. Valdez, Gonzalez y Flores a los fines de la resolución de estos hechos controvertidos, no así los de las Sras. Herrera y Ramos, los que no me generan convicción suficiente, y son descartados, en atención al análisis realizado precedentemente.”....*

“De esta forma, concluyo que la plataforma probatoria precedentemente citada, aporta datos que me permiten confirmar la efectiva prestación de servicios laboral de la Sra. Goane para las demandadas, con las notas típicas de dependencia, y por ende la existencia de un contrato de trabajo entre ellos (Art. 23 LCT). “....

La conclusión a la que llega el A Quo es arbitraria; ya de las pruebas rendidas en autos por el Actor (testimonial, instrumental, absolucón de posiciones) no aportan datos contundentes que permitan confirmar la efectiva prestación de servicios de indole laboral de la Actora dentro del Sindicato (SUTERH), con las notas típicas de dependencia, y por ende la existencia de un contrato de trabajo. Todos los testigos afirman que la actora colaboraba en eventos (día madre, día niño); así que colaboraba con la comision de mujeres pertenecientes la comision directiva del sindicato.

En este sentido, tiene dicho el Máximo Tribunal Local que cuando un hecho controvertido (en especial como el que se analiza referido a la existencia o no de la relación laboral) se deba decidir solamente en base a las declaraciones de los testigos, las mismas deben ser “categóricas, amplias, sinceras, con razón de los dichos y no deben dejar duda” respecto de

los hechos que relatan, en orden a tener por acreditados los extremos respecto de los que depusieron (conf. CSJT, “Sicard vs Cianci”, sent. 642 del 8/8/12; “Acuña vs Bristol”, sent. 495 del 8/7/2011). Así lo declaro.

Es por ello que considero que las pruebas aportadas podrían acreditar que existió una prestación de servicios por parte de la actora a favor de la demandada OSPERYHRA. Pero lo que si es evidente que la Actora no tenía una relación laboral con el sindicato (SUTERH); sino que la Sra Goane desarrollaba una actividad sindical como cualquier otro afiliado, concurrir, colaborar, ayudar en eventos por y para los afiliados.

Lo resuelto por la A Quo en referencia a la existencia de una relación de carácter laboral solo podría ser aplicado eventualmente a la relación entre la actora y la codemandada OSPERHYRA, pero no de la codemandada SUTERH, por las razones que se indicarán a continuación.

Al respecto la parte actora solicitó la responsabilidad solidaria de los demandados, conforme lo dispone el art. 26 de la LCT, como supuesto caso de empleador plural.

Sobre este tema es importante destacar que el sindicato y la obra social son dos personas jurídicas diferentes, y que conforme surge de la Ley N°23660 aquellas organizan su gobierno y tienen su propio régimen de administración y manejo de fondos, además de poseer un marco de actuación específico en las leyes 23660 y 23551, respectivamente.

Aclarado ello, conforme surge del material probatorio reseñado y valorado en el tópico anterior, el hecho de compartir el mismo edificio en calle Salta N° 450 por las demandadas no implica que la actora trabajaba para ambas de manera indistinta. Ante ello y de manera contraria a la versión de la actora, todas las tareas señaladas por los testigos se encuentran vinculadas a los servicios propios de las obras sociales y no de los sindicatos, por lo que la

versión brindada por los testigos constituye un indicio de que la actora prestó servicios para OSPERYHRA y no para SUTERH.

En este sentido y atento a lo valorado precedentemente hay que agregar que no existe prueba en autos que acredite que la actora prestó servicios para la demandada SUTERH, por lo que ante la orfandad probatoria corresponde el rechazo de la demanda en su contra.

Por lo expuesto es que se solicita a V.E. que:

- 1) Se tenga por expresados los agravios en legal tiempo y forma.
- 2) Se haga lugar al recurso de apelación interpuesto, absolviéndose a la demandada (SUTERH) de la presente demanda, con costas a la Actora.
- 3) Se impongan las costas del presente recurso a la Actora en autos.-

JUSTICIA